

¿Qué salida de la crisis?¹

Antonio Antón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El vuelco dado por la moción de censura exitosa a Mariano Rajoy y el Gobierno del PP, encabezada por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, con el apoyo de Unidos Podemos y sus convergencias y demás fuerzas progresistas, abre un nuevo horizonte para avanzar en la regeneración democrática, una imprescindible agenda social común y la reconducción dialogada del conflicto territorial. Una oportunidad para consolidar el necesario cambio social y político de progreso. Pero veamos el diagnóstico y los retos para desarrollar, particularmente, una agenda social sustantiva que aborde las graves consecuencias de la crisis social y económica, así como revertir las políticas de ajuste y austeridad aplicadas por la derecha.

1. ¿Hacia dónde vamos? El reto de la necesaria agenda social

La crisis socioeconómica tiene múltiples facetas. Más si le añadimos la crisis política y territorial, así como las percepciones y actitudes sociopolíticas de sociedad y en particular de las capas populares. Hay tendencias contradictorias. Por una parte, desde hace varios años se ha terminado la recesión económica y hay crecimiento económico y del empleo. Por otra parte, se consolidan la precariedad laboral y la desigualdad social, mientras persisten un paro masivo, la devaluación salarial, los efectos de los recortes sociales y laborales, la mayor subordinación de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial impuesto en las reformas laborales, así como el debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo.

Se produce una pugna sociopolítica y discursiva en torno a qué tipo de salida de la crisis se está produciendo, qué horizonte de relaciones laborales y de empleo se están generando, qué modelo social se está instaurando, quiénes salen de la crisis económica y quiénes no. Las percepciones de la sociedad y las dinámicas laborales y sociopolíticas son contrapuestas. Es preciso el rigor analítico e interpretativo para clarificar una posición normativa.

Continuamos en el marco de una profunda crisis social y económica, aun con realidades contradictorias. Así lo afirma el 54% de la población -y el 62% de los votantes del PSOE y el 69% de los de Unidos Podemos-, según *Metroscopia* (15-5-2018), que considera que la crisis económica “No ha sido superada y no se superará hasta dentro

¹ Desarrollo de la ponencia expuesta en *La Bóveda*, mayo de 2018. Una versión académica se ha presentado al **IV Encuentro del Comité de Investigación de Sociología del Trabajo** de la *Federación Española de Sociología-FES* (Universidad Autónoma de Barcelona, junio de 2018).

de muchos años”; el 26% opina que “No ha sido superada, pero se superará dentro de poco” y el 18% que “Ha sido superada”.

Además, existe una persistente crisis política, con amplia desconfianza cívica hacia las élites gobernantes y una recomposición de la representación política. Se ha superado el viejo bipartidismo compartido entre *Partido Popular* y *Partido Socialista* y se han consolidado nuevas fuerzas emergentes de distinto signo: por un lado, como nueva derecha, *Ciudadanos*, y por otro lado, en el campo progresista o de izquierda, las llamadas fuerzas del cambio, con *Unidos Podemos*, las convergencias y las candidaturas municipalistas de unidad popular.

Dejo al margen el análisis de dos procesos significativos que condicionan fuertemente esta dinámica estatal: el *procés* independentista en Cataluña y la correspondiente reacción centralizadora, con la crisis de modelo territorial, y el carácter e impacto del poder y las políticas liberal-conservadoras europeas.

Un hecho relevante a destacar, frente a los planes de normalización, es el nuevo proceso de indignación cívica. **Lo significativo son las dinámicas ciudadanas y las alternativas sociales y su relación con el cambio político-institucional**, así como las posibilidades de acuerdos de progreso, incluyendo las dificultades de la colaboración entre *Partido Socialista* y fuerzas del cambio, imprescindible para garantizar la hegemonía institucional del campo progresista frente a las derechas.

Tras el largo ciclo electoral y de reajuste representativo e institucional, precedido de una etapa de masiva indignación cívica y movilización popular, **estamos en otra fase política con dos opciones: la articulación del cambio político de progreso, o la consolidación reaccionaria de las derechas**. Está por ver la conformación de qué tendencia va a ser dominante. El diagnóstico de su interacción no está claro e independientemente de la voluntad transformadora de distintos actores requiere el máximo de realismo analítico.

Es una etapa transitoria hacia las nuevas convocatorias electorales de 2019 (municipales, autonómicas y europeas) y 2020 (generales), decisivas para consolidar las posibilidades de avance sociopolítico y representativo y las expectativas de cambio de progreso o, bien, el continuismo de la estrategia liberal-conservadora. La pugna sociopolítica y discursiva se establece sobre el sentido de su trayectoria y la legitimación de los actores principales. Supone la necesaria adecuación estratégica de las fuerzas progresistas respecto de las alternativas sociales para el cambio socioeconómico e institucional, el empoderamiento cívico y la democratización política.

Hay dos tipos de interrogantes sometidos a una fuerte pugna cultural-discursiva, derivada de las posiciones contrapuestas respecto al actual continuismo económico y el bloqueo político-institucional. Además, existen dinámicas ambivalentes, favorables y desfavorables para el cambio, y complejas, cuya relación no aclara una trayectoria dominante: avanzar o retroceder, ganar o perder. El futuro está abierto y es incierto. O sea, habrá que rechazar las visiones deterministas, económicas y políticas, sobre la inevitabilidad de una salida u otra, progresista o reaccionaria, y

poner el acento en los mecanismos de activación y articulación popular y su capacidad transformadora.

Así, hay que responder, primero, a cuestiones analíticas o interpretativas: ¿Cuáles son las características y el sentido de esas tendencias sociales y políticas de fondo? ¿Qué dinámicas y perspectivas existen para la activación cívica o la movilización social? ¿Qué impacto tienen para el cambio político-institucional? Segundo, hay que explicar la orientación política y la estrategia transformadora: ¿Cómo avanzar hacia un cambio de progreso y qué bases sociales tiene? ¿Cómo se conforma el movimiento popular y qué relación tiene con la representación política e institucional? ¿Cuál es el perfil social de las fuerzas del cambio, las políticas públicas más necesarias para la sociedad y el papel y la relación con la socialdemocracia? Por tanto, hay dos tareas: una de interpretación, de construcción de un diagnóstico realista de las dificultades y condiciones para el cambio social y político; y otra, de carácter político-estratégico, de definir un horizonte y un camino democrático de progreso.

Comienzo por la crítica a la posición dominante en el discurso político y académico. Obedece a prejuicios ideológicos y a intereses corporativos de los grupos de poder y a la garantía de estabilidad para su gestión. La podemos designar como liberal-conservadora o socio-liberal, según los matices. Viene a negar la persistencia y gravedad de las consecuencias de la crisis social y económica, a reafirmar el continuismo económico y su supuesta inevitabilidad, como vía única de salida, y defender el poder y el orden establecido. Infravalora el malestar social e intenta manipularlo. Se sitúa en el supuesto post-malestar como aval para una nueva hegemonía política partidaria del continuismo (renovado) de la estrategia y el poder liberal-conservador, con una activa campaña mediática que acentúe la pasividad crítica ciudadana y restrinja la oposición cívica y su representación institucional. Está empeñada en cerrar la crisis política con un amplio proceso de 'normalización' ciudadana e institucional, el aislamiento o neutralización de la protesta social y la dinámica alternativa de cambio, así como la relegitimación de las élites gobernantes y sus políticas con ligeros recambios.

Lo más llamativo es la reconfiguración de las derechas, con el ascenso de *Ciudadanos* a costa del descenso del *Partido Popular*, con alguna retórica regeneracionista, cierto marketing político de apariencia renovadora y una reafirmación neoliberal en lo socioeconómico y recentralizadora en lo territorial.

La tendencia político-ideológica dominante de ese bloque es reaccionaria: va hacia un debilitamiento del Estado de bienestar y los derechos sociales y laborales de las capas populares, un nuevo autoritarismo político con democracia débil, y un consenso de Estado bajo un nacionalismo españolista conservador y centralizador, ajeno a la diversidad nacional. Así mismo, se subordina a la clase gobernante hegemónica liberal-conservadora europea, sin un proyecto modernizador, social y democrático de país (de países), ni la construcción de una Europa más justa e integrada.

Pero la realidad social de las mayorías ciudadanas no encaja con esos intereses, proyectos y estrategias continuistas y reaccionarios. **Hay una pugna sociopolítica y**

cultural-discursiva por definirla e interpretarla para consolidar la actitud social y las normas político-institucionales en torno a dos opciones básicas: continuidad o cambio de progreso. Por un lado, con privilegio de poder para las derechas (y el mundo económico-empresarial) y, por otro lado, con una alternativa social y democrática. Por tanto, existen grietas en ese plan normalizador o, lo que es lo mismo, se mantienen abiertas posibilidades de cambio. El bloqueo institucional y el relativo equilibrio entre las ofensivas reaccionarias y las dinámicas progresistas son inestables. Se trata de valorar los elementos que pueden decantar la tendencia hacia una alternativa social, democrática y de progreso, ganar las elecciones generales próximas y evitar el riesgo de un dominio prolongado de las derechas con rasgos autoritarios y regresivos o la tentación de una operación de gran centro.

Nueva indignación cívica

Queda lejos el 15-M-2011. No obstante, con características distintas y en un contexto diferente, **se está conformando un nuevo proceso de indignación social, con dinámicas proclives a la activación cívica, con motivos y ámbitos específicos, entre los que sobresale un renovado e integrador sujeto sociopolítico.** Me refiero, sobre todo, al movimiento feminista y su ejemplar y justa movilización por la igualdad y la justicia. Pero también hay indicios de nuevas protestas sociales, por ejemplo la de los pensionistas y colectivos de gente trabajadora –el número de huelgas laborales y participantes en ellas ha vuelto a crecer en 2017-. En otro sentido están las dinámicas nacionalistas que expresan un fuerte malestar aunque con otras mediaciones y sentido político. Paralelamente, se comprueba la dificultad de las élites gobernantes y los cauces institucionales para satisfacer las demandas populares de justicia social, igualdad y democracia que afectan a la mayoría ciudadana, con agotamiento del discurso legitimador de su gestión.

La interacción entre indignación popular y activación cívica con valores democráticos e igualitarios y el agotamiento de la credibilidad de las élites gobernantes por su gestión impopular ha dado como resultado la conformación, entre los años 2008 y 2016, de unos nuevos equilibrios político-institucionales. Pero, sobre todo, se ha reforzado una nueva mentalidad crítica; se ha consolidado una cultura democrática en amplias mayorías sociales, especialmente juveniles, con la reafirmación en la justicia social y la dignidad ciudadana que choca con el poder establecido y sus prácticas más corruptas, regresivas y autoritarias.

Analizo ese ámbito sociopolítico dejando al margen las implicaciones en la esfera estrictamente electoral, donde la competencia entre un continuismo remozado y un cambio sustantivo para desplazar y sustituir la hegemonía de la vieja derecha se está agudizando. Tampoco entro en su posible impacto en la configuración institucional a medio plazo, más difíciles de discernir hoy. Solamente señalar que los resultados electorales de 2019 y el nuevo carácter de los grandes ayuntamientos del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, A Coruña...) y algunas comunidades autónomas significativas (Madrid, Comunidad valenciana, Andalucía, Navarra...) van a

tener una influencia sustancial en las expectativas de cambio gubernamental de progreso a través de las elecciones generales de 2020.

En todo caso, **mi pronóstico es la nueva dimensión, interacción y articulación de esos tres factores –indignación cívica, activación popular progresista y representación política alternativa-, que expresan el comportamiento y las mentalidades de amplios sectores sociales.** Ello aun en un contexto económico y político parcialmente diferente al de la última década en que se instaló la fuerte crisis social, económica y política y a las identidades pre-crisis. Sin embargo, su existencia constituye la palanca necesaria para posibilitar y porfiar en un cambio de progreso. Tenemos la experiencia de las distintas respuestas sociopolíticas y una limitada y contradictoria evaluación teórica, a menudo deudora de esquemas interpretativos rígidos. Pero creo que hay que poner el énfasis en el análisis riguroso de los nuevos componentes y tendencias de esta etapa que comienza para definir mejor una posición normativa o estratégica transformadora.

De entrada, **debo afirmar la necesidad de un enfoque realista, crítico y socio-histórico de esta dinámica sociopolítica democrático-igualitaria frente a la posición liberal-conservadora de neutralizarla o distorsionarla.** Igualmente, entre miradas progresistas, hay que superar tres tipos de enfoques, a veces interrelacionados. Primero, los límites de una interpretación determinista económica, basada en el impacto mecánico de las condiciones materiales de existencia, por lo que la crisis económica conllevaría rebeldía popular generalizada (o integración cuando termina). Segundo, la visión determinista política, que considera que la crisis del poder o el Régimen político y la recomposición de la representación política crearía ventanas de oportunidad para un cambio de progreso, cuando hay que valorarlas socio-históricamente por la relación de ambas fuerzas –populares y de los poderosos- y el sentido sustantivo de los distintos sujetos y su tipo de cambio. Así mismo, tercero, es insuficiente la interpretación idealista del populismo discursivo, que sobrevalora la influencia del discurso y el liderazgo en la construcción de una dinámica sociopolítica o un sujeto colectivo transformador –el pueblo-, infravalorando la experiencia popular y cívica, el sentido de las relaciones de fuerzas sociales y las estructuras socioeconómicas.

Por tanto, frente al discurso neoliberal del comienzo de una nueva fase de crecimiento económico, desarrollo social y normalización política, funcional para su hegemonía institucional, todavía es pertinente el concepto de crisis socioeconómica y política y, más general, el de crisis sistémica. No en su versión extrema y determinista, como derrumbe o hundimiento del capitalismo y/o del régimen político que abocaría necesariamente a una transformación radical; idea catastrofista e ilusa con poca credibilidad. Sino crisis en su acepción convencional y contingente, con dos rasgos: uno, dificultades de esos sistemas para cumplir su función de garantizar el contrato social y político de bienestar social, igualdad y democracia, con deslegitimación de las élites gobernantes; dos, al mismo tiempo, oportunidad para un relevante cambio (de

progreso), mediante la participación cívica y según los reequilibrios de las fuerzas sociales, económicas y políticas. El futuro sigue abierto y en disputa.

Empiezo, utilizando las fuentes demoscópicas del CIS y *Metroscopia*, por explicar las percepciones de la sociedad española, luego señalo algunos datos laborales y sociales significativos de la mano de *Eurostat* y la EPA del INE, para terminar con unas conclusiones, a modo de pronóstico.

2. Persiste el malestar cívico en la mayoría social

Frente a la idea extendida interesadamente de que se ha iniciado una etapa post-malestar, dando por finalizado el descontento masivo y, por tanto, las bases para reclamar un cambio de políticas y políticos, sostengo lo contrario: persiste una valoración negativa mayoritaria de la situación económica y política; ha disminuido algo cuantitativamente, pero la permanencia en esa posición sigue siendo mayoritaria y más consistente.

Pero, además, y a diferencia de otros países europeos, ese malestar de fondo se traduce, mayoritariamente, en una actitud cívica, desde la reafirmación de la justicia social y los valores democráticos e igualitarios, no segregadores, autoritarios o reaccionarios, por mucho que sectores poderosos estén impulsando ya esa senda. Junto con la activación ciudadana, particularmente de la nueva marea igualitaria del movimiento feminista, y el desgaste de las élites gobernantes, esta nueva ola de indignación cívica permite aventurar la prolongación de la pugna por el cambio, sin su cierre histórico inmediato y la posibilidad de un reequilibrio democrático y de progreso.

La incógnita principal, dejando aparte la consistencia del gran poder liberal-conservador, deviene de la configuración político-institucional de las fuerzas progresistas, con una indefinición de la dirección del *Partido Socialista* bien por la operación Gran Centro (la prioridad de su alianza con *Ciudadanos*), para asegurar un continuismo remozado y la neutralización de factores de cambio, bien por un acuerdo de Progreso (la colaboración con *Unidos Podemos* y convergencias), abriendo otra etapa de reequilibrios institucionales en favor de las demandas populares y el cambio institucional.

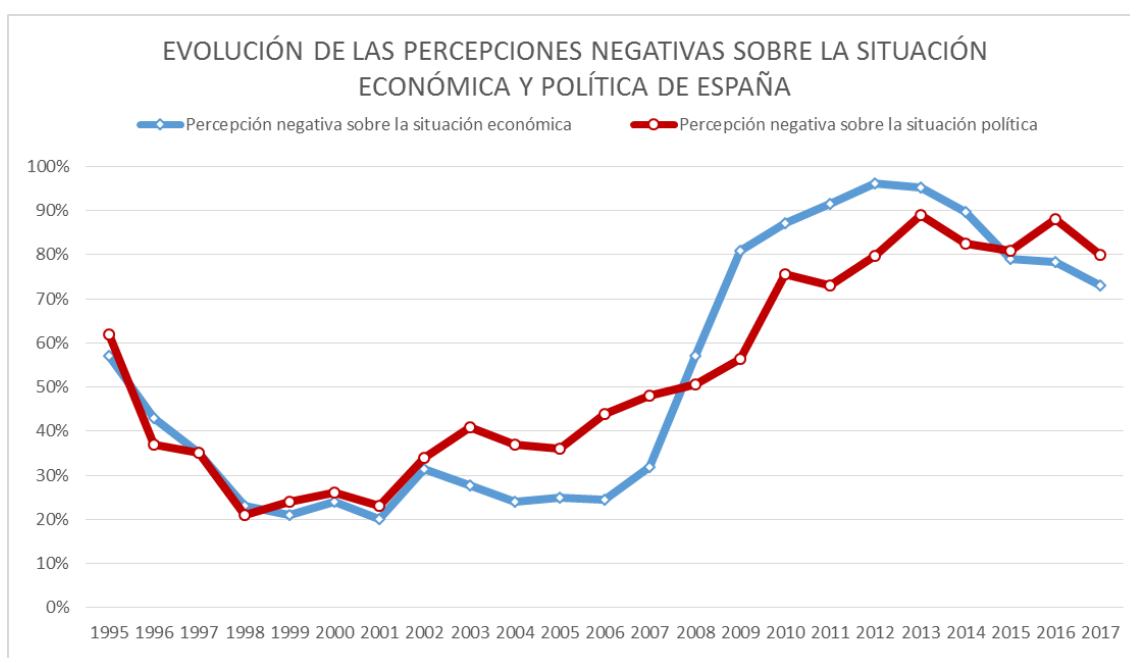
Pero veamos las tendencias sociopolíticas que van a condicionar la resolución de ese dilema. Empiezo por algunos datos significativos de la actitud ciudadana.

En primer lugar, el gráfico 1 señala la opinión ciudadana acerca de la evaluación de la situación económica y política de España, entre los años 1995-2017. Explica claramente las tres fases de la percepción negativa de la situación económica y la situación política, con pequeñas variaciones asimétricas: primero, entre los años 1997 y 2007, una valoración negativa limitada, menor de un tercio de la población; segundo, un ascenso muy pronunciado y rápido en ambos ámbitos a partir del año 2008 y su culminación entre los años 2010 y 2014, que llega al 90% de la sociedad; tercero, una

ligera bajada, aunque se mantiene en el 80% de opinión negativa en el caso de la situación política y cerca del 70% el de la económica.

Significa, por un lado, la persistencia de más de dos tercios de personas descontentas y, por otro lado, una limitada disminución de la percepción negativa que alcanza a un tercio de la sociedad. Ese cambio de tendencia enseguida se ha interpretado oficialmente como inexorable, profunda y acelerada. Estaría derivada de la supuesta mejoría económica y normalización política, e intenta legitimar las políticas gubernamentales restrictivas. Pero, como veremos, esa realidad socioeconómica no ha llegado suficientemente a la mayoría social que así lo refleja en sus percepciones.

Gráfico 1: Evolución de las percepciones negativas sobre la situación económica y política de España

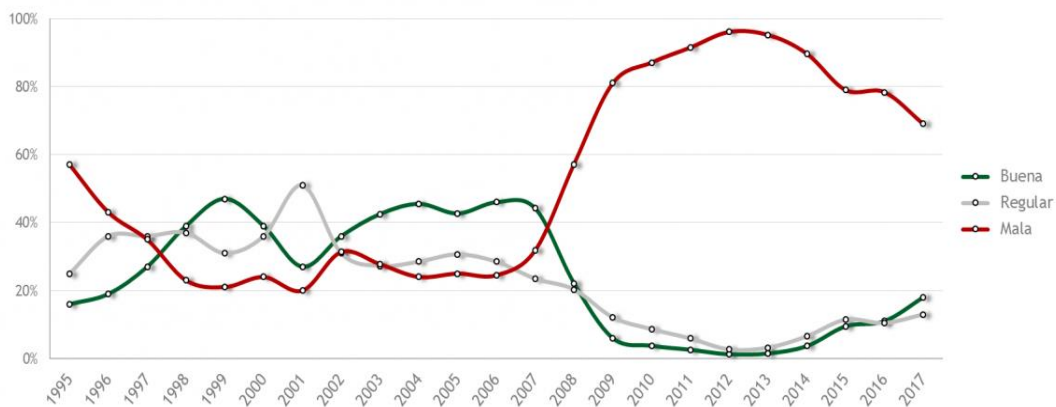


Fuente: Metroscopia, marzo de 2017

El único dato complementario significativo es la diferencia por edad de la percepción negativa de la situación económica: mayores de 65 años: 65%; jóvenes: 85%. Corresponde con el proceso de mayor precarización y descenso de sus condiciones vitales y expectativas laborales de la gente joven.

Gráfico 2: Evaluación de la situación económica de España (1995-2017)

Evaluación de la situación económica de España
(1995-2017)



Fuente: Banco de datos de Metroscopia.

Silvia Bravo / Metroscopia

En segundo lugar, similares datos aporta también otro estudio (gráfico 2), también del año 2017, de la misma empresa demoscópica, respecto de la evaluación de la situación económica en España, sólo que con un ligero cambio de opciones. Así, desde una media en torno al 25%, entre los años 1997 y 2007, de personas que consideran la situación de *Mala* hay un incremento sustancial de más del 50% adicional con esa opinión a partir del año 2008, llegando a superar el 80% hasta el año 2014. Después, es verdad que se inicia un ligero descenso hasta situarse cerca del 65%.

Es decir, se producen dos fases. La primera con un incremento muy profundo, rápido y generalizado de la percepción negativa: es el período álgido del malestar, la indignación y la protesta social; y la segunda con una reducción más limitada, aunque todavía lejos de la valoración pre-crisis y sin saber el ritmo y la intensidad de su evolución futura. De momento, solo se ha desactivado una minoría de descontentos frente a los problemas socioeconómicos y su gestión política, que puede corresponder a las capas acomodadas o resignadas con un perfil conservador.

No obstante, hay que reconocer un ligero aumento de la visión más optimista, con un sector que califica la situación económica de *Buena*, que pasa de prácticamente del 1% entre los años 2011-2013 hasta cerca del 20% actualmente; e, igualmente, un pequeño incremento de las personas que pasan de una calificación de *Mala* a otra de *Regular*, desde el 2% hasta el 15%, con una ligera reducción de la percepción negativa. Por tanto, todavía persiste una amplia mayoría en torno al 80% con una valoración crítica de la situación económica (dos tercios *Mala* y un 15% *Regular*).

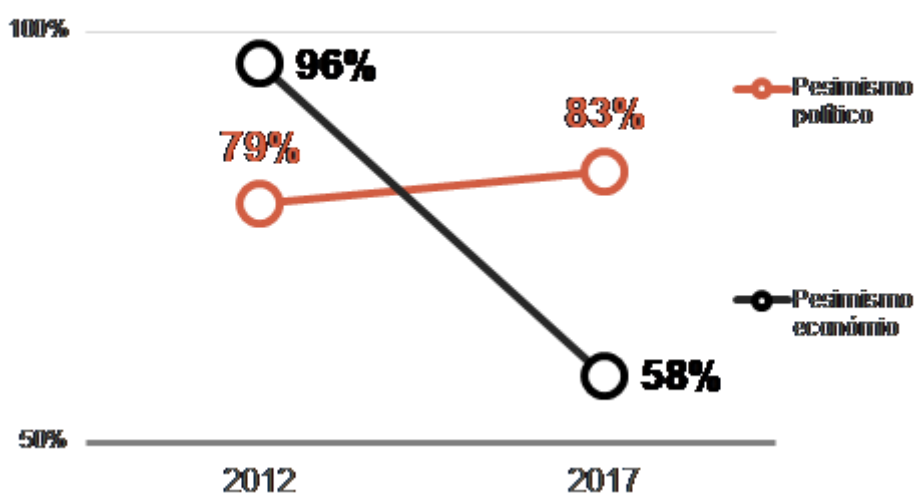
Gran parte de los esfuerzos mediáticos y políticos dominantes buscan, precisamente, controlar, ampliar y acelerar esa normalización o, más bien, evitar la visibilidad del malestar cívico, así como neutralizar su expresión política. Pero sus prácticas para conseguirlo desbordan los métodos ordinarios de la persuasión, la deliberación y el debate públicos y se adentran en la manipulación divulgativa, el autoritarismo y el desplazamiento de la atención y las prioridades a otros campos

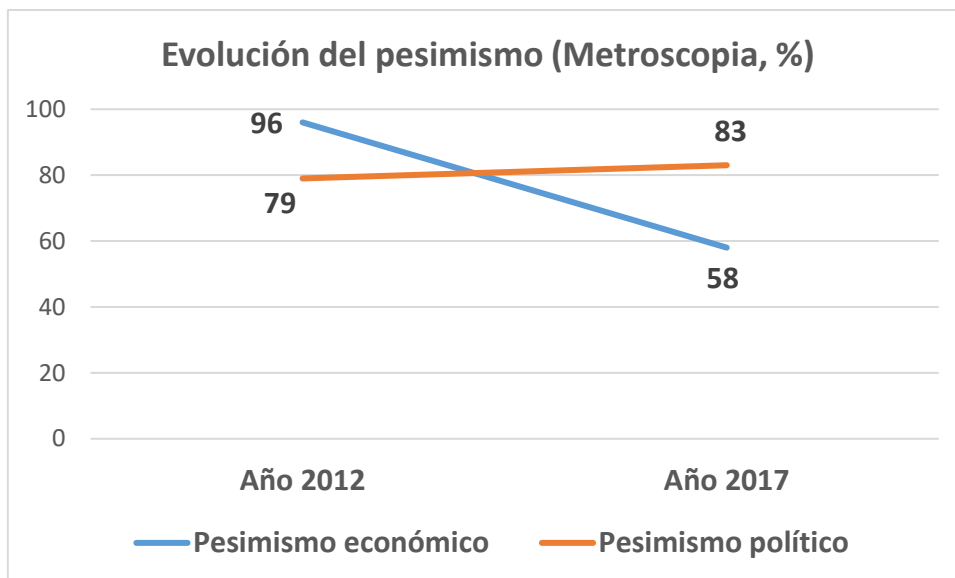
fabricando otros enemigos, como el nacionalismo periférico, o promoviendo intolerancia xenófoba y racista. El sentido de la realidad, junto con la convivencia y la democracia se debilitan.

En definitiva, en la realidad actual permanece una distancia cualitativa de la valoración negativa de la ciudadanía respecto de la época anterior a la crisis y las políticas regresivas, autoritarias y corruptas. No hay reversión total de la valoración social negativa de la situación económica y menos de la situación política. El cambio de opinión menos duro –*Buena y Regular*- es minoritario y afecta solo a menos de un tercio de la población. Y no se puede afirmar la aceleración de esa tendencia ni la generalización de esta dinámica supuestamente superadora de la opinión crítica y el descontento cívico.

En resumen, inicialmente, en el período pre-crisis, solo había una cuarta parte de la población descontenta con la dinámica económica y política. Ascendió de forma rápida y generalizada, en una primera fase de crisis socioeconómica aguda y profundas consecuencias y recortes sociales y laborales para la gran mayoría de la sociedad. Luego, en una segunda fase de prolongación de la desigualdad social y la precariedad social y laboral pero con leves mejoras materiales en algunos sectores de la población, se produce esa ambivalencia: consolidación de la percepción negativa en la mayoría junto con una minoría significativa que ve el panorama positivo. Por tanto, la opinión negativa ha descendido ligeramente pero una mayoría de dos tercios insiste en ella.

Gráfico 3 (en dos versiones): Evolución del pesimismo (2012-2017)





Fuente: *Metroscopia*, noviembre de 2017

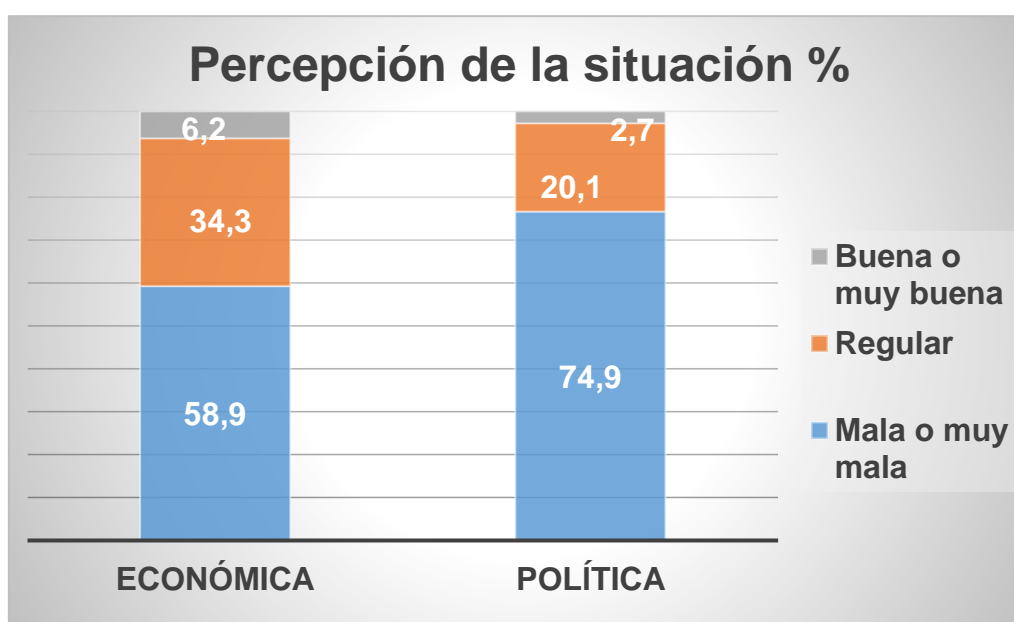
En tercer lugar, profundizo la interpretación con el siguiente gráfico 3, sobre el pesimismo económico y político, también de *Metroscopia*, expuesto en dos versiones para contraponer las perspectivas visuales del fenómeno: una la original y otra de elaboración propia con los mismos datos.

Estas dos versiones parten de los mismos datos, pero como decía, la interpretación de la simple visualización rápida puede ser distinta. Desde el año 2012, con el máximo pesimismo económico (96%), se pasa, en el año 2017, al 58%, es decir todavía una mayoría aunque ha descendido significativamente en más de un tercio. Sin embargo, hay que advertir dos detalles. Uno, la profunda inclinación descendente en la representación del primer gráfico, oficial, que infiere un descenso muy pronunciado y rápido. En el segundo gráfico, de elaboración propia, el descenso es más suave y, además, el dato total se compara con el conjunto de la población a partir de 0, es decir, refleja un espacio mayor que la mitad de la población, que al excluirlo en el gráfico anterior, pareciera que no se visualiza a esa mitad pesimista.

Por tanto, el primer gráfico induce a error: acentuar un descenso rápido y generalizado del pesimismo económico (el pesimismo político crece). Esa apariencia científica permite justificar mejor la tesis interpretativa de *Metroscopia* de que el descontento social ha pasado a la historia y se inicia una fase 'post-malestar'. El segundo gráfico corresponde mejor a la representación realista del conjunto de la situación y las tendencias.

En cuarto lugar, avanzo un poco más en el análisis de estas dinámicas con datos del CIS, con una muestra mucho más amplia, según su Estudio 3.207, del último *Barómetro* de marzo de 2018 (gráfico 4). Se trata de la percepción actual de la situación económica y política y la comparación con la opinión de la situación de hace un año y la expectativa para dentro de un año.

Gráfico 4: Percepción de la situación económica y política (%)



Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

La percepción de la situación económica es *Mala o muy mala* para cerca del 59% de la población, similar al del pesimismo económico de *Metroscopia*; pero aquí concreta el importante sector de más de un tercio que la define *Regular*; sólo una minoría del 6,2% la considera *Buena o muy buena*, o sea, es optimista. Los datos de la percepción de la situación política son más graves y contundentes.

Es interesante valorar la percepción de los cambios habidos, según la tabla 1. Un 20% considera que en el último año ha mejorado la situación económica general; probablemente esa parte ha pasado de una opinión de *mala a regular* o de *regular a buena*; en todo caso, unas minorías. Sin embargo, es relevante el contundente 80% que considera que hoy está *peor o igual* (es decir, empeorando todavía más o manteniendo la situación *mala o regular*); en ambos casos al prolongarse esa situación se consolida y afecta más gravemente. Igualmente, en el caso de la situación política la percepción es más negativa y alcanza al 96% (las personas que dicen *igual* a una situación valorada de *mala o regular*, engrosan esa percepción crítica), y solo un 4% considera que ha mejorado. Es todo un cuestionamiento a las élites gobernantes por la falta de credibilidad de su gestión.

Tabla 1: Perspectiva sobre la evolución de la situación económica y política

Situación respecto a hace un año (%):	Económica	Política
<i>Peor</i>	26,9	43,5
<i>Igual</i>	51,4	49,3
<i>Mejor</i>	20,0	4,0

Situación para dentro de un año (%):	Económica	Política
<i>Peor</i>	21,4	29,1
<i>Igual</i>	44,0	44,5
<i>Mejor</i>	21,4	10,2

Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

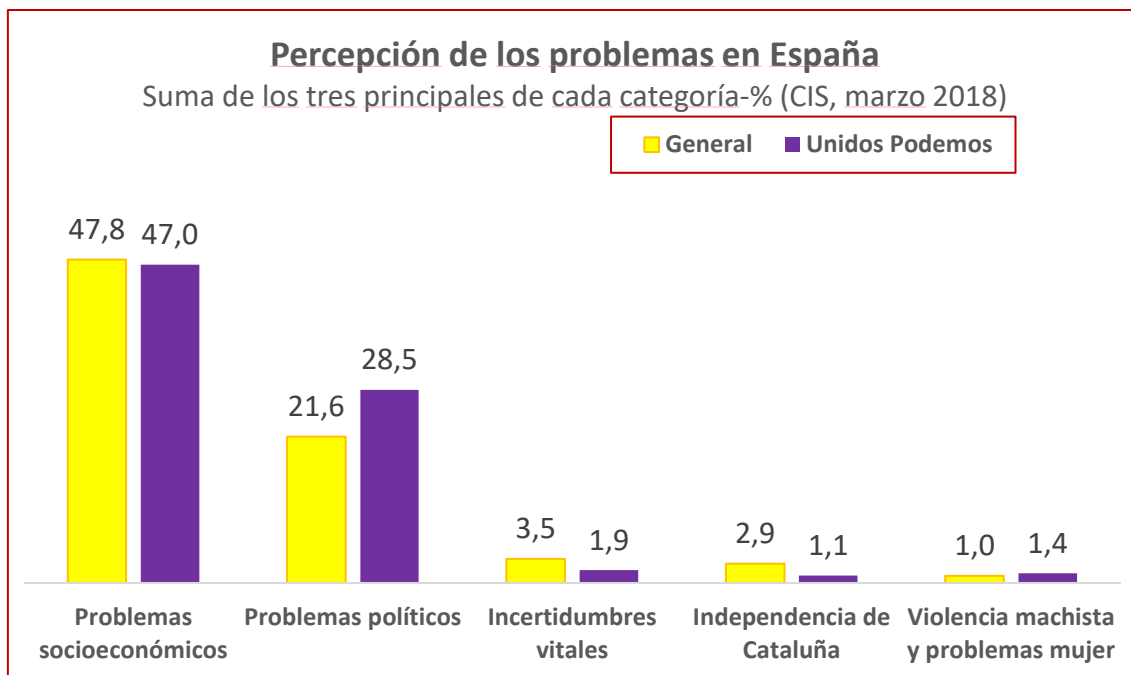
Por último, es relevante valorar las expectativas de cambio, suponiendo que no se introducen mecanismos transformadores adicionales y que perdura la inercia actual. Sólo un 21% prevé una mejor situación económica y un 10% la política. ¿Cómo interpretar el amplio segmento del 44% en ambos ámbitos que dicen que la situación va a seguir *igual*?. Desde la opinión mayoritaria de que las dos situaciones, económica y política, son actualmente *malas* o *regulares*, la previsión de su persistencia para dentro de un año no augura optimismo ciudadano sino pesimismo o incertidumbre.

Hay escasa confianza popular en los cambios que pudieran producir las actuales clases gobernantes o los grandes poderes económicos (o por la suerte u otras circunstancias ajenas). Así mismo, denota la existencia de pocas expectativas (o ilusiones) sobre la capacidad transformadora inmediata de la propia sociedad, el movimiento popular o las fuerzas alternativas, con obstáculos poderosos. Se dibuja cierta impotencia. Hay descontento y deseo de cambio, pero con pocas esperanzas inmediatas, sin acabar de ver qué mecanismos pueden producir cambios relevantes. Es un reto para las fuerzas progresistas, incapaces hasta ahora de generar credibilidad en torno a un horizonte y un camino de avance social y democrático que pueda sobreponerse al estatus quo y la inercia actuales.

En quinto lugar, detallo la opinión de la sociedad sobre los principales problemas existentes, con datos del citado *Barómetro* del CIS (gráfico 5). La pregunta es sobre los tres principales problemas en España y el propio Estudio expone la suma de las tres respuestas de primero, segundo y tercero.

Desde hace años el principal problema es el paro (que ha descendido un poco, hasta el 65,9%, sumados los tres principales), y el segundo, la corrupción y el fraude (que se ha incrementado algo, hasta el 34,5%). No obstante, aquí los presento agrupados en cinco bloques: problemas socioeconómicos (paro, calidad del empleo, pensiones, sanidad, educación...), políticos (corrupción y fraude, los políticos, el Gobierno y partidos concretos, inestabilidad política...), incertidumbres vitales (inseguridad ciudadana, crisis de valores...), independencia de Cataluña y violencia machista y problemas de la mujer.

Gráfico 5: Percepción de los problemas en España



Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

Dejo aparte varios problemas con porcentajes de solo unas décimas (entre ellos son llamativos los ‘recortes’ y la ‘reforma laboral’, hoy con un impacto evidente y una implementación permanente pero lejanas en su aprobación normativa). Pongo el porcentaje referido a cien, para tener la referencia comparativa habitual. Además, señalo las respuestas de los votantes de *Unidos Podemos* (sin las convergencias catalana, gallega y valenciana, cuyos datos aparecen aparte) para constatar la existencia de algunas diferencias respecto al conjunto de votantes; en particular, por su mayor énfasis en los problemas políticos que la media, junto con mayor preocupación por la violencia machista y los problemas de las mujeres y menor por las incertidumbre vitales. Por otro lado, respecto a la independencia de Cataluña, cuya preocupación es menor que la media, en el caso de *En Comú Podem* asciende a 4,5 puntos, cuadruplicando la de *Unidos Podemos*.

En definitiva, persiste una mayoritaria desconfianza respecto de la mejoría de la situación económica y, sobre todo, política. Alcanza a la limitada credibilidad de la gestión institucional (pública y privada) de las élites dominantes para cumplir con su responsabilidad política y el contrato social de garantía del bienestar público, el interés general o el bien común.

Por tanto, existe un **nuevo proceso de indignación social con un bloqueo institucional**. La mayoría ciudadana percibe, recuerda y prevé malestar social y descontento político. Existe actitud crítica, deseo de mejoras socioeconómicas justas y político-democráticas; pero también escepticismo (realista) sobre su realización por la clase política aunque sin resignación adaptativa. Son ingredientes ambivalentes que junto con la disponibilidad de una ciudadanía activa permiten aventurar una activación

cívica con amplia simpatía popular frente al bloqueo impuesto por el poder establecido que cuenta con cierta legitimidad y adaptación resignada de una base social significativa, acomodada y conservadora.

Sin embargo, ante esta dinámica de desgaste especial de la derecha gobernante del *Partido Popular*, debido a su corrupción, autoritarismo y descrédito de su gestión económica y territorial caben, por parte del poder establecido, otras dinámicas reaccionarias, distorsionadoras o neutralizadoras de la nueva ola de indignación cívica. El bloqueo político y la falta de credibilidad en la política institucional requieren, al menos, un cambio cosmético y retórico incluyendo el recambio, al menos parcial, de la élite gobernante y algunas mejoras relativas.

Está por ver si *Ciudadanos* es el eje hegemónico y si se produce el acuerdo o la subordinación del PP (nuevas derechas) o del PSOE (gran Centro). El *Partido Socialista*, en este contexto de posibilidades de ir hacia adelante (progreso y democracia) o hacia atrás (continuismo renovado), adquiriría una responsabilidad histórica al apostar por una de las dos opciones y ralentizar o no el cambio de progreso. La salida centrista o socioliberal a su actual encrucijada va a influir en su futuro como fuerza relevante, al igual que en otros países europeos. Una respuesta de izquierdas o progresista le conllevaría conflictos con el poder establecido, pero abriría un horizonte de progreso para la mayoría ciudadana.

En consecuencia, junto con la actitud cívica mayoritaria y la activación social progresista e igualitaria, están las mediaciones institucionales y políticas, entre las que no son menores la estrategia de la dirección socialista ante su encrucijada y la consolidación de las fuerzas del cambio y la salida democrática y fraterna al conflicto territorial. Todo ello, frente al proyecto dominante del bloque de poder europeo de una estrategia liberal conservadora, con una democracia débil, una cohesión social frágil y una integración institucional mínima, condicionada por todas las tendencias reaccionarias, autoritarias, antisociales y xenófobas, que confluyen en impedir una alternativa social y de progreso en una Unión Europea más justa y solidaria.

Por último, conviene citar que, respecto de la polémica en décadas atrás, sobre el descenso de la importancia de los problemas 'materiales' en beneficio de los valores 'post-materiales' en las nuevas sociedades postmodernas, avanzadas o de la abundancia, la posición generalizada, incluida la violencia machista, la independencia de Cataluña y las incertidumbres vitales, la problemática central se concentra en el bienestar material y relacional, la adecuada gestión institucional democrática y la seguridad vital. Evidentemente, con sus componentes culturales, simbólicos e identitarios en una visión de las relaciones sociales y trayectorias vitales más integral, multidimensional e interactiva. Se confirma la tesis realista de que cuando fallan las condiciones básicas de existencia y convivencia de las mayorías sociales hay una reafirmación valorativa en torno a la solución cívica de esa problemática, normalmente basada en la justicia social y la democracia, cuestionada por el poder neoliberal y el ascenso de la actual derecha extrema xenófoba y autoritaria.

3. Se consolidan graves problemas socioeconómicos

A pesar de algunas mejoras macroeconómicas y de empleo, persisten graves consecuencias sociales, económicas y laborales para la mayoría de la sociedad. Se incrementa la desigualdad social, la precarización laboral y la devaluación salarial. Hay riesgos de consolidación de la involución social y democrática. Al mismo tiempo, permanece un amplio descontento popular y se han activado importantes movilizaciones sociales como la feminista y la protesta de pensionistas.

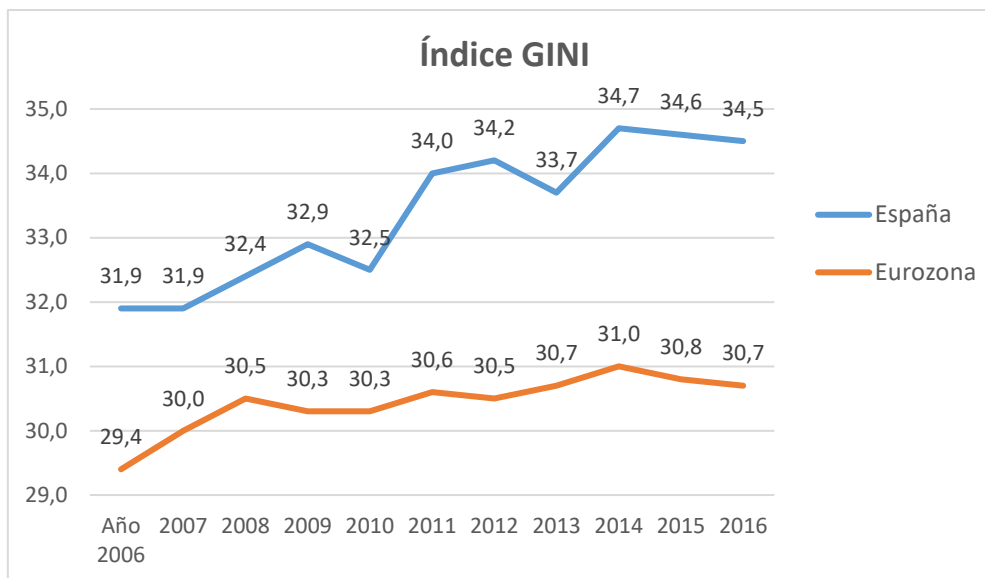
Señalo los datos más significativos sobre esa realidad socioeconómica para sacar posteriormente algunas conclusiones más generales.

En primer lugar, la evolución de la desigualdad social con el indicador más reconocido y completo, el índice GINI (0, expresa máxima igualdad; 100, máxima desigualdad), con datos de *Eurostat*, la agencia estadística europea.

En el gráfico 6 se exponen los datos de España y la eurozona (19 países) desde antes de la crisis y su desarrollo posterior, con una distancia significativa. A diferencia de la eurozona, cuyo crecimiento de la desigualdad es muy limitado en todo el periodo (apenas un punto), en España se nota un aumento pronunciado de casi tres puntos (cerca de un 10% más), con un ensanchamiento de la brecha existente con la media de la eurozona. La tendencia es ascendente hasta el año 2014 (34,7), en que desciende ligeramente aunque los parámetros se mantienen altos hasta el año 2016 (34,5), último con datos disponibles.

Dos tipos factores explican esta diferencia de mayor intensidad e incremento de la desigualdad social en España: por un lado, el mayor nivel de desempleo, destrucción de la ocupación, precariedad laboral y devaluación salarial; por otro lado, el menor peso de las políticas públicas protectoras, en particular prestaciones de desempleo, bajas pensiones y rentas mínimas. Así mismo, hay que constatar esa ligera mejoría de décimas en los dos últimos años, derivada del relativo incremento del empleo y la disminución del paro masivo. Pero, como se ve, el aspecto principal es el mantenimiento y prolongación de una fuerte desigualdad que conlleva graves consecuencias sociales, especialmente para la gente empobrecida y con riesgos de exclusión social.

Gráfico 6: Índice GINI de desigualdad social



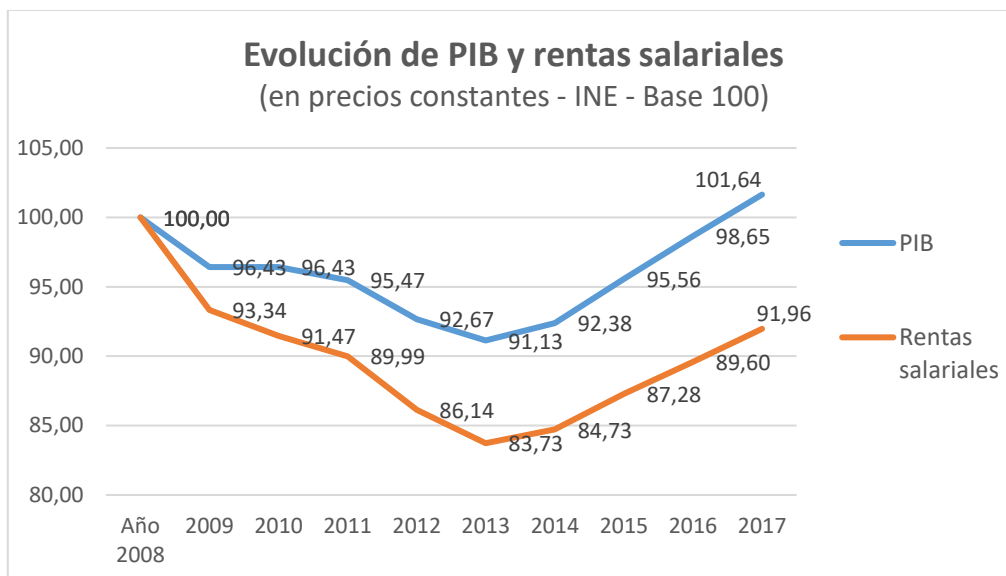
Fuente: Eurostat

Así, el riesgo de pobreza en España, siguiendo con Eurostat, en ese mismo año 2016, llegaba al 27,9% (trece millones), cuatro puntos y medio más que la media europea. O que en 2017, según el INE, diez millones de personas (desempleadas e inactivas que quisieran un empleo) son 'vulnerables ante el empleo', tienen pobreza laboral, con una situación más grave para cerca de la mitad que viven en hogares con ingresos laborales bajos (60% de la mediana).

En segundo lugar, explico la comparación de la evolución del PIB y las rentas salariales en estos últimos diez años, desde el inicio de la crisis económica (gráfico 7). En el año 2017 (último con datos disponibles), por primera vez (en precios constantes) se ha superado el importe de PIB del año 2008 (101,64 sobre 100); es decir, la producción económica total se ha recuperado a niveles precedentes de la crisis. No obstante, vemos que las rentas salariales todavía están más de ocho puntos por debajo respecto de ese comienzo de la crisis (91,96 sobre 100) y la distancia en relación al PIB actual se ha incrementado hasta casi diez puntos. Significa que el porcentaje de las rentas salariales se ha recuperado algo desde el nivel mínimo del año 2013 (83,73), pero la distancia con respecto al mayor crecimiento del PIB va aumentando y su capacidad adquisitiva sigue siendo menor.

El crecimiento económico revierte fundamentalmente en los beneficios empresariales (y un poco en los impuestos) cuya ventaja comparativa se consolida en detrimento de una distribución justa hacia los salarios. La contención salarial sigue en marcha, a pesar de la reactivación económica. Las clases trabajadoras reciben menos y tienen menor capacidad adquisitiva y dado su menor poder contractual impuesto por las reformas laborales y la precarización del empleo tienen más dificultades para defender sus condiciones laborales.

Gráfico 7: Evolución de PIB y rentas salariales (2008-2017)



Fuente: INE

En tercer lugar, ese reparto no equitativo al conjunto de las capas asalariadas, además, es muy desigual en relación con los distintos segmentos según su nivel de ingresos, expresados en *deciles* (gráfico 8). Se pueden agrupar en tres segmentos. Primero, hay un descenso pronunciado de los ingresos medios en el 50% de las rentas más bajas (particularmente en el 20% de los que menos cobran con una devaluación salarial media entre el 22,5% y el 13,7%); segundo, se mantienen los ingresos en el 20% las rentas salariales intermedias; tercero, hay un ascenso relativo en torno al 1,8% en el 30% de las más altas.

No obstante, cabe una precisión ya que no todas las personas asalariadas son de clases trabajadoras (aquí no se tienen cuenta personas inactivas y autónomas, ni tampoco las desempleadas que engrosarían el porcentaje de las clases trabajadoras hasta más del 70% de esa población). Así, podemos traducir esa distribución salarial en *deciles* en términos de clases sociales por el criterio convencional (liberal) del nivel de ingresos que, en general, coincide cuantitativamente, según datos de la EPA, con el criterio weberiano-marxista según la cualificación del empleo ejercido y el control, dominio, estatus o posesión de los medios de producción. El salario 'mediano' que es el que refleja el gráfico está en unos 1.600 euros mensuales. Pero aquí, para esa distinción de clase, considero la frontera de los ingresos salariales 'medios', que están cercanos a 1.900 euros mensuales brutos en catorce pagas (exactamente para el año 2016, 1.878 euros, 2.075 para hombres y 1.661 para mujeres); por encima de la cual adjudico un estatus económico de clase media y por debajo de clase trabajadora.

Gráfico 8: Devaluación salarial y desacoplamiento de los salarios y productividad %

Devaluación salarial

Variación real de los ingresos salariales medios de 2008 a 2015 En %



Fuentes: INE y CC OO

Desacoplamiento de los salarios y la productividad En %



BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

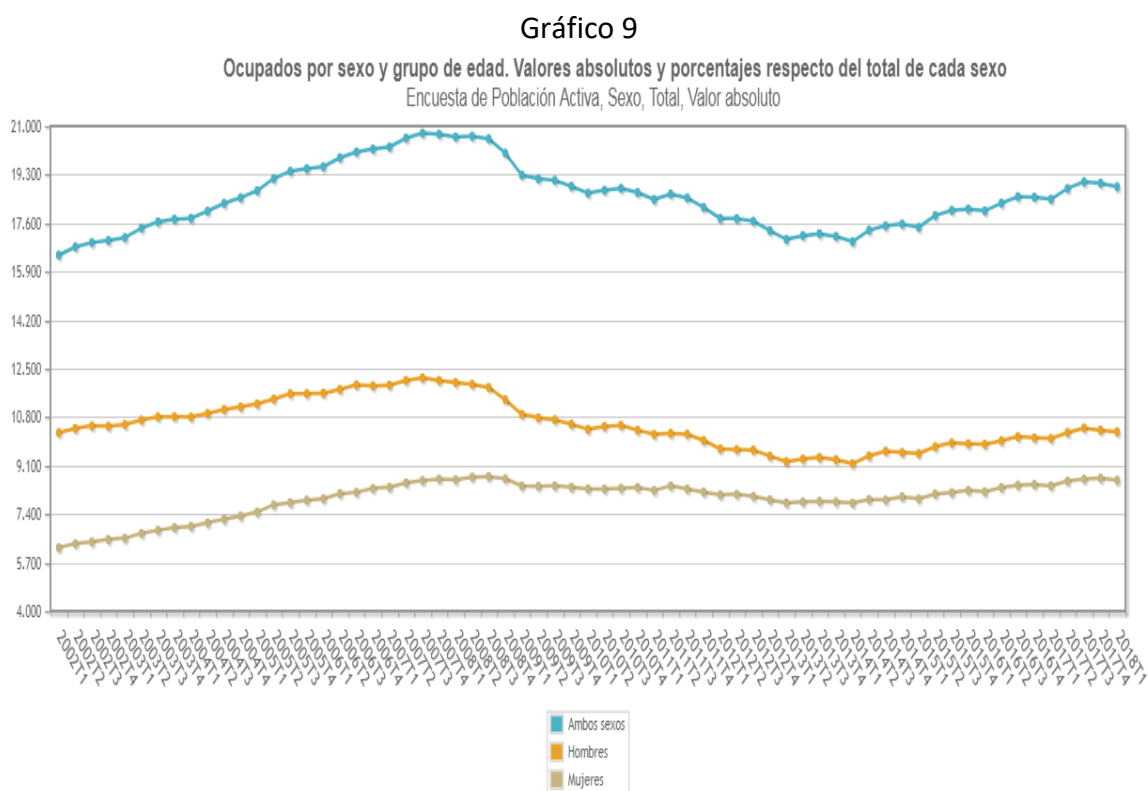
Fuentes: INE, CCOO y Cinco Días.

Tenemos, básicamente, tres clases sociales distintas. Primero, un 60% de clases trabajadoras (en plural), con, al menos, dos segmentos diferenciados: el 30% del sector más precarizado y en empleos poco cualificados, con una fuerte devaluación salarial, que lo componen unos 4,5 millones que cobran menos de 1.200 euros; otro 30%, con una devaluación menor y empleos semicualificados, que lo forman otros 4,5 millones que cobran entre 1.200 y 1900 euros. Segundo, tenemos algo más del 30% de capas asalariadas perteneciente a las clases medias (unos 6 millones) que no han sufrido la devaluación salarial y que en esos ocho años duros incluso han mejorado sus ingresos ligeramente, con una posición económica acomodada no exenta de otros riesgos e incertidumbres. Tercero, una minoría dentro del *decil* de los que más cobran, pero con un peso cualitativo importante y que forman parte de las élites ejecutivas poderosas o clases dominantes, y cuyos ingresos han crecido más (aunque su impacto no aparece en esta estadística).

Por último, hay que señalar, según el citado gráfico 8, el desacoplamiento de la evolución de los salarios y la productividad, especialmente en el último año y medio en que sube la productividad por hora (hasta +1,9%) y baja sustancialmente el salario por hora (-0,2%). Es decir, las mejoras tecnológicas y de organización productiva, así como

la intensificación del trabajo que incrementan la productividad no revierten en una mejora de las rentas salariales sino de los beneficios empresariales.

En cuarto lugar, comento las tendencias de la ocupación (gráfico 9) y del desempleo (gráfico 10), en valores absolutos y de acuerdo con la EPA, con su evolución entre los años 2002 y 2018.



Fuente: INE-EPA

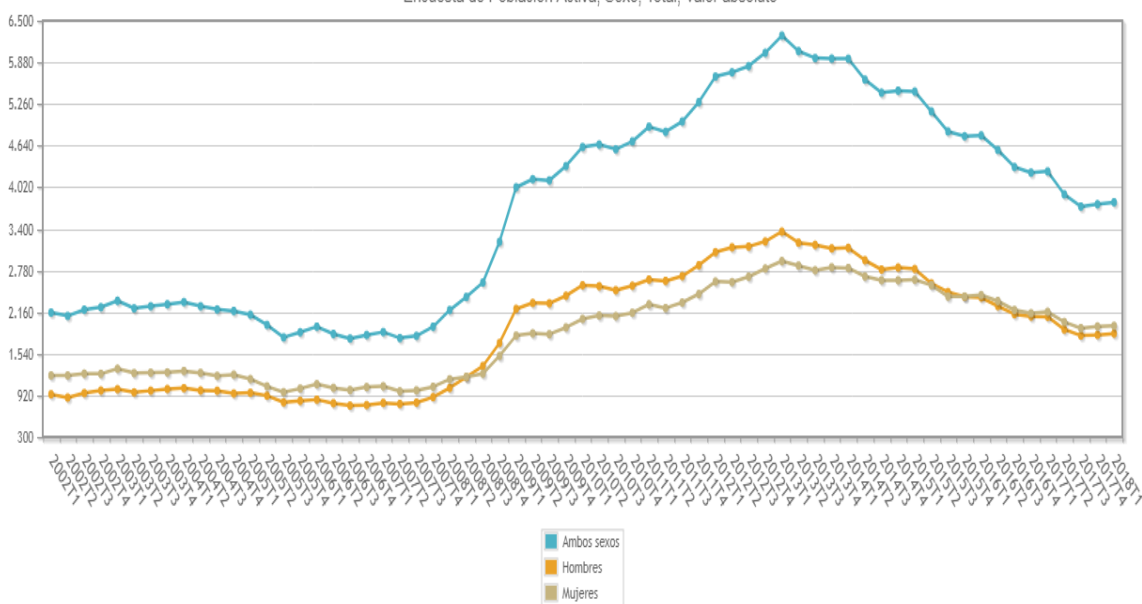
Se suceden tres periodos de prácticamente un lustro cada uno: en el primero (2002/2007), un incremento relevante de la ocupación de casi cinco millones hasta llegar a un máximo cercano a los 21 millones; en el segundo (2008/2014), una fuerte destrucción de empleo de casi cuatro millones, quedándose en un mínimo en torno a 17 millones; tercero, un incremento moderado de la ocupación que no llega a unos dos millones hasta situarse cerca de los 19 millones. O sea, hay creación de empleo pero solo llega a suplir la mitad del destruido. La tendencia de su recuperación es clara, aunque la distancia entre ambos sexos –en detrimento del volumen de mujeres- es significativa. Además, el total general y el total masculino –las mujeres han tenido menores oscilaciones- todavía están lejos del nivel pre-crisis (ello sin contar con la relativa baja tasa de empleo actual: 48,7%).

El gráfico 10 expone la evolución de los datos de desempleo que presentan unas variaciones más pronunciadas que las de la ocupación y sin que existan grandes diferencias por sexo. Desde 1,8 millones de personas paradas, el mínimo en 2007 (8% de la población activa), hasta el máximo de casi 6,3 millones en 2013 (27%). Es decir, un

incremento de cuatro millones y medio para posteriormente producirse una reducción de dos millones y medio y situarse en 3,8 millones en 2018 (16,7%). En este caso, la disminución del total de personas paradas no llega a la mitad del incremento producido con la crisis y los ajustes, con una tasa de paro que todavía es el doble que al comienzo de la crisis. Estamos lejos de recuperar los valores pre-crisis, cuando el volumen de desempleo y la tasa de paro todavía eran relevantes y superiores a la media europea.

Gráfico 10

Parados por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada sexo
Encuesta de Población Activa, Sexo, Total, Valor absoluto



Fuente: INE-EPA

En definitiva, pueden cronificarse las consecuencias de las llamadas reformas estructurales, sobre todo, en el mercado de trabajo, con la mayor desigualdad en las relaciones laborales, un fuerte sometimiento de la fuerza de trabajo y una prolongación de la precariedad laboral y social. Y el crecimiento económico, por sí solo, no lo resuelve. Este plan neoliberal de salida de la crisis es parcial. Las ganancias empresariales y el poder económico-financiero se recomponen, existen algunas mejoras relativas a partes minoritarias de la sociedad, se recuperan parcialmente algunas condiciones perdidas en el momento más crítico, pero la dinámica mayoritaria de las clases trabajadoras es que se quedan en un peldaño inferior en sus condiciones sociales y laborales, en sus trayectorias vitales. Y lo que es más grave, con mayor desigualdad social, es decir, con más distancias comparativas y menores oportunidades respecto de las capas más acomodadas. Y, particularmente, con mayores desventajas en relación con los núcleos de poder económico y político que pretenden reafirmar su hegemonía institucional a largo plazo. Se abre una nueva fase histórica de nuevo capitalismo (financiero o

extractivo) con subordinación generalizada de las capas populares, una mínima cohesión social y una gestión política con una democracia débil.

4. Dinámicas contradictorias y su impacto en el cambio

El diseño liberal conservador conlleva la persistencia de gran parte de las desventajas impuestas a la mayoría social por su gestión regresiva y autoritaria de la crisis, cuyos rasgos principales pretenden consolidar, no revertir. Así, la amplia indignación cívica es la base sociopolítica, democrática y ética para mantener la pugna por impedir esa salida ambivalente de ventajas para los de arriba y desventajas para los de abajo; o para transformar ese modelo institucional y de crecimiento con mayor desigualdad de poder y en las condiciones sociales y laborales de las mayorías populares.

¿Quiénes salen de la crisis y quiénes no?

En consecuencia, **existen algunas mejoras económicas y de empleo respecto del periodo anterior más crítico pero, al mismo tiempo, mayores desventajas relativas de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial.** El discurso dominante, primero crecer -admitiendo la lógica neoliberal- y luego repartir, apenas esconde que el resultado distributivo es más desigual y los niveles de empleo y desempleo están lejos de la época pre-crisis. Es un engaño; los beneficios de la supuesta recuperación económica se concentran en los de arriba y sigue estando peor compensada la mayoría social.

No obstante, entre las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso), existe una diferenciación atendiendo a los dos indicadores básicos de poder adquisitivo de sus ingresos salariales y su situación de ocupación o desempleo.

Por un lado, están las personas que experimentan una ligera mejoría económica en los últimos años respecto del inicio de la crisis y, particularmente, del momento más profundo de la misma. Hay dos bloques diferenciados por el estatus inicial y final.

Uno, de situación acomodada, compuesto por un 40% de la población asalariada, o menos del 30% de la población activa (si consideramos a personas autónomas –con un nivel similar de ingresos- y en desempleo –con un nivel inferior). Tienen relativa estabilidad, cualificación de empleo y estatus de clase media, aunque tengan cierta incertidumbre personal o familiar y en sus trayectorias.

Otro segmento distinto es gente precaria con una mejoría relativa, pero sin salir de una situación crítica. Son, básicamente, los dos millones y medio de nuevas personas ocupadas (con la reducción de diez puntos de la tasa de desempleo) que han pasado del paro a un empleo, normalmente precario, con alta intensidad del trabajo y con salarios reducidos. El número, sobre todo de jóvenes, es algo superior contando con que muchas

de ellos están en rotación con el desempleo y la inactividad y en peores condiciones laborales y salariales que las personas empleadas anteriormente. O sea, siguen sin consolidar una trayectoria laboral estable o ascendente. Una parte significativa ha salido del pozo más profundo, pero siguen teniendo un estatus precario de clase trabajadora, aunque menos malo que en sus peores momentos o respecto a otros sectores en descenso.

Por otro lado, está el bloque empobrecido por la devaluación salarial y más subordinado por la imposición del poder empresarial y la precariedad laboral (incluido el temor al desempleo). Es el bloque mayoritario de clases trabajadoras, de más de dos tercios, al que no le ha llegado todavía la recuperación económica, ni siquiera en sentido comparativo con el periodo más crítico. No tienen recortes adicionales, pero continúan en un peldaño inferior y viven el riesgo de prolongar esa situación de lento y continuado deterioro vital.

Hay tres segmentos de la población activa diferenciados por el distinto punto de partida y el nivel de sus retrocesos materiales que al persistir incrementan su gravedad: los 3,8 millones de gente parada (16%), un millón jóvenes, muchos de ellos de forma prolongada y con escasa protección al desempleo; el 30% inferior por ingresos salariales y condiciones laborales, la mayoría jóvenes, sobre los que recaen los ajustes más duros; el otro 30% intermedio de clase trabajadora, con deterioro de su capacidad adquisitiva y en una situación vulnerable.

Además, entre los años 2010-2017 la capacidad adquisitiva de las pensiones ha caído cuatro puntos, por la diferencia entre su congelación inicial, su subida última del 0,25% y la superior inflación. Afecta a nueve millones y medio de pensionistas, también perdedores de los recortes sociales. Pero el impacto mayor de las dos reformas aprobadas por el Gobierno del PSOE (2011) y del PP (2013), suponen una pérdida media de todas las personas activas anteriores, respecto de sus derechos precedentes, de un 20% cada una de ellas, contando con que su implementación es gradual en los años siguientes. Además, frente a la idea oficial de que las pensiones españolas son generosas, la realidad es que la gran mayoría son bajas. La propaganda de los poderes fácticos para evitar su indignación, dividirlos y que abracen la resignación adaptativa no ha sido suficiente para contrarrestar la decidida movilización y apoyo social. De momento, el Gobierno ha admitido un retroceso parcial y reconocido la subida según el IPC (previsto) para los próximos tres años, sin asegurarla en el futuro ni desactivar el resto de ajustes regresivos de ambas reformas.

Por último, ya he hecho mención antes a la amplia brecha de empleo y salarial entre hombres y mujeres que cobran de media una cuarta parte menos. Solamente añadir la constatación de la existencia todavía de persistentes diferencias en distintos ámbitos laborales y de empleo, por ejemplo en la tasa de actividad: 64,3% de los hombres y 52,9% de las mujeres.

Pero las diferencias más significativas en las relaciones salariales y laborales son por edad, afectan a la gente joven popular y, en ese sentido, sobre todo a las

mujeres jóvenes. Éstas, habiendo conseguido bastante igualdad en los méritos académicos, un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales más libres, con un proceso de empoderamiento vital y mayores expectativas profesionales, se enfrentan a un mayor choque con las evidencias de la precariedad laboral juvenil. A ello se añade las todavía persistentes estructuras machistas y discriminaciones de género que amenazan sus trayectorias vitales. No es de extrañar que sean las mujeres jóvenes, con dificultades en sus procesos de inserción laboral y profesional y problemas adicionales de discriminación de género y acoso sexista, quienes hayan nutrido la respuesta popular más masiva de los últimos años, a través de la movilización feminista. Esa nueva marea por la igualdad y la justicia refleja ese profundo descontento acumulado y esa aspiración al cambio en las relaciones laborales y personales más igualitarias, así como una gestión política e institucional (y judicial) más democrática y feminista, superadora también de las insuficiencias de las políticas institucionales de igualdad y contra la violencia machista.

En definitiva, existen dinámicas contradictorias. Aparte de la minoría elitista del 1% a la que le ha ido muy bien con la crisis y los ajustes económicos, hay un amplio sector acomodado de clase media, en torno al 30%, que ha sorteado las peores consecuencias de la crisis económica, de empleo y devaluación salarial, con menor impacto de las políticas de recortes sociales y laborales. Ha encajado, aun con temor, los momentos de mayores incertidumbres personales y familiares y va cobrando confianza sobre la posibilidad de estabilizar su mejor posición comparativa y continuar en esa senda, relativamente ventajosa, en el actual marco socioeconómico. Para ese bloque es funcional el discurso neoliberal de las derechas de continuismo económico, aunque no todos tienen mentalidad liberal-conservadora. Es la disputa principal entre las derechas del PP y C's, a los que también apoyan otros sectores populares conservadores. Aunque, una parte es, política y culturalmente, progresista, persiste en su oposición a la degradación democrática o su solidaridad con su entorno, pero tiende a la moderación en los cambios socioeconómicos.

El discurso liberal-conservador, legitimador de las políticas públicas autoritarias y regresivas, no corresponde a la realidad de las mayorías sociales, las clases trabajadoras y parte de las clases medias descontentas.

Por un lado, no es cierto que las ligeras mejorías económicas sean derivadas de las reformas estructurales neoliberales y sirvan para legitimar sus políticas y su gestión. Obedecen, sobre todo, a otros factores externos favorables (expansión monetaria del BCE, control financiero de los intereses de la deuda, inestabilidad de países competidores en turismo, bajo precio de la energía...).

Por otro lado, **no es verdad que la mayoría ciudadana esté saliendo de la crisis social y económica. Cada vez más experimenta la consolidación de lo sustancial de la involución social y democrática pasada:** prolongación de la mayor desigualdad social, precarización del empleo, reducción de derechos sociales y laborales y proceso gradual

de desmantelamiento del actual Estado de bienestar (con un tope al gasto público siete puntos inferior a la media europea).

Ardua tarea por delante para impulsar la imprescindible agenda social por la nueva mayoría parlamentaria de progreso.

El impacto en el cambio

El horizonte europeo, según el plan liberal conservador, es: Estado social de mínimos, democracia débil, subordinación de las clases populares al poder económico-empresarial, neutralización del descontento social y la indignación cívica, así como contención de la activación popular y la capacidad representativa y relacional de las fuerzas progresistas. No es un proceso de reversión del estatus social y político de las mayorías ciudadanas previo a la crisis y la ofensiva neoliberal, al menos para el sur europeo.

Ese plan normalizador, compartido por el bloque de poder europeo dirigido por Merkel, con la colaboración del SPD y Macron, tiene un grave problema: la deslegitimación cívica, especialmente en el sur europeo, derivada de la insatisfacción de las demandas populares y la persistencia de una amplia cultura democrática y de justicia social. Y para imponer su modelo político y económico deben contrarrestarla. En ello están, apoyándose en los condicionamientos y presiones de los populismos de derecha extrema, xenófobos y autoritarios.

En ese sentido, **la socialdemocracia**, cuyas direcciones mayoritariamente (y salvo excepciones como en el caso portugués o británico) han colaborado con esa estrategia dominante, **está en una gran encrucijada con dos opciones por delante**: Abrazar la operación gran centro y el continuismo económico y político, manteniendo solo una ligera retórica progresista con poca credibilidad; o bien, mantener una política de reformas igualitarias y democráticas con alianzas de progreso. **Su decisión va a definir su futuro, así como influir sobre el ritmo y las condiciones del cambio.**

Las fuerzas alternativas tienen un gran reto: definir y consolidar un proyecto de cambio con un fuerte perfil social, vinculado a los problemas y percepciones de la mayoría social y estimulando los procesos de indignación social y activación cívica. El sujeto sociopolítico no se construye solo o principalmente por el discurso de una élite política o ilustrada. Se conforma a través de la experiencia relacional y la articulación popular en el conflicto social y frente a las relaciones de poder, desigualdad y subordinación.

La representación política y la gestión institucional progresistas deben estar interrelacionadas con la actividad de movimientos sociales, grupos populares y tejido asociativo, con una vinculación y arraigo entre la gente, con una democracia participativa. La pugna por el tipo de modelo social europeo y una construcción equilibrada e integrada está abierta. La soberanía popular y la diversidad nacional se deben articular con un horizonte de cambio europeo, basado en una ética universalista

de los derechos humanos, unas relaciones económicas y políticas democráticas y solidarias y un sistema de co-soberanías y gobernanzas multinivel. Existen posibilidades para avanzar en un cambio de progreso. Debe partir de dos ejes centrales de la cultura progresista europea: igualdad (o justicia social) y libertad (o democracia). Es decir, una democracia social y económica avanzada y participativa, en una Europa más justa y solidaria.